Ejecutivo singular

Radicado 54-001-40-03-010-2022-00750-00

JUZGADO DÉCIMO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CÚCUTA

Cúcuta, veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Procede el despacho a pronunciarse con respecto al recurso de reposición y en subsidio de apelación, presentado por el abogado FABIO STEEVEN CARVAJAL BASTO, quien actúa en causa propia dentro de esta acción, contra el auto del 27 de octubre de 2022, mediante el cual, entre otros puntos, el despacho se abstuvo de decretar la medida cautelar de embargo y retención de las sumas de dinero destinadas al pago de salarios, honorarios, bonificaciones, mesadas pensionales, devengados por la demandada en su condición de pensionada, en razón a lo allí motivado. (folio 11, archivo 01, numeral 2°).

Para motivar su inconformidad, el memorialista expresa que, bajo ningún motivo la norma que sirve de apoyo para denegar la medida cautelar es aplicable al caso que nos ocupa (ley 100 de 1993), alegando que dentro del presente asunto la señora Alba Isabel Peñaloza Correa, goza en la actualidad de una pensión de jubilación con destinación de pago a cargo de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público “Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG” desde el 10 de octubre del año 2012; y por otra parte percibe una pensión gracia con destinación de pago a cargo de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – “Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional FOPEP”; antecedentes que alega haber probado al momento de radicar el escrito cautelar, conforme el aporte de los actos administrativos que otorgaban dichas acreencias.

Añade el recurrente **DE MANERA TEXTUAL**, que es necesario mencionar que, en cuanto a las prestaciones económicas que son objeto de embargo dentro del presente caso, son completamente embargables y ello es en consecuencia que tanto la Ley 91 de 1989 quien dispone reglamentar el FOMAG, como del FOPEP, es esta norma quien ordena darle un origen netamente fiduciario y que por ningún motivo será administrado y/o pagado con los recursos del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrada por COLPENSIONES ni tampoco por el Régimen de Ahorro individual con Solidaridad administrada por las AFP privadas, situación completamente contraria al ordenamiento jurídico, de cuya interpretación se basa el despacho para denegar la medida de embargo.

Concluye sus argumentos, solicitándole al despacho que, en reconsideración del análisis normativo y en aplicación del ordenamiento

jurídico, reponga el auto en discusión referente a la medida de embargo solicitada.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

El mandatario judicial recurrente, en el numeral 2 del escrito de medidas cautelares, solicitó el embargo y retención de las sumas de dinero destinadas al pago de salarios, honorarios, bonificaciones, mesadas pensionales y/o cada una de las acreencias e ingresos emanados de la relación laboral y reglamentaria vigente en la que se encuentra la demandada; y sobre el monto de embargabilidad de las mesadas pensionales, señaló que las mismas podrían ser embargadas hasta en un 50 % de su mensualidad, basando su solicitud en lo establecido en el inciso **2º DEL ARTÍCULO 3º DEL DECRETO 1073 DEL AÑO 2002**.

El despacho mediante auto de fecha 27 de octubre de 2022, se abstuvo de decretar la medida cautelar antes reseñada, en primer lugar, por cuanto dicha solicitud era confusa en cuanto respecta a su redacción, ya que el demandante daba a entender que la demandada poseía sumas de dinero al pago de salarios, honorarios, bonificaciones, mesadas pensionales con respecto a terceros, pero luego de haber realizado un mayor análisis, se coligió, que lo que pretendía el profesional en derecho, era que se le embargara la mesada pensional a la demandada, ya que es, beneficiaria de la pensión vitalicia de jubilación (ver folios 14 a 18, archivo 01 OneDrive); y fue en razón a ello, que no se accedió, ya que la pensión vitalicia, es inembargable de conformidad con el artículo 134 de la ley 100 de 1993, en el cual se destaca que las pensiones pueden embargarse, exclusivamente, por cuotas alimentarias y deudas con cooperativas; lo cual, no acontece en el caso de marras.

Ahora bien, si tenemos en cuenta la solicitud de medida cautelar objeto de discusión, se encuentra basada en el **inciso 2º del artículo 3º del decreto 1073 del año 2002**, el cual reza así: *“Los descuentos realizados sobre el valor neto de la mesada pensional, esto es, descontando el aporte para salud, incluyendo los permitidos por la ley laboral, podrán efectuarse a condición de que no se afecte el salario mínimo mensual legal y el beneficiario pueda recibir no menos del cincuenta por ciento (50%) de la mesada pensional”*.

El anterior aparte, fue modificado por el **decreto 994 de 2003**, quedando de la siguiente manera: *“Los descuentos realizados sobre el valor neto de la mesada pensional, esto es, descontando el aporte para salud y a las Cajas de Compensación Familiar, incluyendo los permitidos por la ley laboral, podrán efectuarse a condición de que el beneficiario reciba efectivamente no menos del cincuenta por ciento (50%) de la mesada pensional”*.

Del canon normativo anterior, y sobre el cual el recurrente basó su solicitud de decreto de medida cautelar primigenio, denotamos que el mismo fija un límite de descuentos a efecto que el beneficiario de la pensión, reciba no menos del 50 % de la mesada pensional, sin que, en ningún aparte de dicha norma, se establezca que se puedan realizar descuentos y/o embargos a favor de personas naturales, como es que lo pretende hacer ver el actor.

Ahora, en el escrito contentivo del recurso, el profesional del derecho recurrente invoca como sustento normativo de su petición la Ley 91 de 1989, la cual, una vez estudiada, observamos que se echa de menos que en dicha disposición normativa se establezca, que se puedan embargar las pensiones de los docentes a favor de una persona natural, como es pretendido por el aquí recurrente.

Lo anterior permite concluir sin dubitación alguna, que al no establecerse de manera expresa en un decreto, ley o disposición normativa, que se permitan embargar las pensiones de los docentes a favor de personas naturales, diferentes a embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas, ello quiere decir, que persiste su inembargabilidad a la luz de lo establecido en el artículo 134 de la ley 100 de 1993; lo anterior, en armonía con el decreto 994 de 2003 y la sentencia 4084-02 del 13 de septiembre de 2007 del Consejo de Estado.

Así las cosas, no es necesario profundizar más respecto de un tema nítido y sencillo; por ende, no se repondrá el auto citado.

Referente a conceder el recurso subsidiario de apelación; el mismo, no es procedente, por cuanto estamos inmersos en un proceso de única instancia (mínima cuantía), como así quedó registrado en auto de fecha 27 de octubre de 2022.

Finalmente, el abogado demandante, pretende que este operador judicial tenga por notificada a la demandada, bajo los apremios del canon normativo 290 del CGP (ver archivo 07 OneDrive); frente a lo cual, el despacho dispone no acceder, por cuanto la notificación enviada obrante en el último folio del archivo 07, trata de una mera citación regulada en el artículo 291 de nuestro estatuto procesal; máxime cuando el contenido del cuerpo del mensaje es erróneo, toda vez que le es advertido a la destinataria que cuenta con diez (10) para ejercer su derecho de defensa y contradicción, y el artículo 291 del CGP, itero, trata meramente de una citación y/o comunicación, a efectos de invitar al destinatario a que acuda a notificarse, siendo errónea a todas luces la notificación allegada; por lo anterior, se le exhorta al profesional en derecho, a realizar las notificaciones en debida forma, bien sea con apego a los artículos 291 y 292 del CGP, y/o conforme lo dispone la ley 2213 de 2022.

Como consecuencia de lo anterior, el despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: No reponer el auto de fecha 27 de octubre de 2022, en razón a lo motivado.

SEGUNDO: Absteneros de conceder el recurso subsidiario de apelación, en razón a lo motivado.

TERCERO: No acceder a tener por notificada a la demandada, por lo expuesto en las motivaciones.

CUARTO: Exhortar al abogado demandante, a realizar las notificaciones en debida forma, conforme lo dispone la ley 2213 de 2022.

NOTIFÍQUESE

El Juez,,

JOSÉ ESTANISLAO YÁÑEZ MONCADA.

Firmado Por:

Jose Estanislao Maria Yañez Moncada

Juez Municipal

Dirección Ejecutiva De Administración Judicial

División 010 De Sistemas De Ingeniería

Cucuta - N. De Santander

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e9e3e76029baf22a4bcba7ae95a8efc98ecaa12a76b93a39c39964b50fcc7db**

Documento generado en 20/06/2023 05:42:04 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

Ejecutivo singular

RADICADO N°54-001-4003-010-2023-00521-00

JUZGADO DÉCIMO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CÚCUTA

Cúcuta, veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Se encuentra al despacho la demanda de la referencia, presentada por ANA BEATRIZ PICO DIEZ, quien actúa en causa propia, en contra de OMAR FABIÁN SUESCUN SALAZAR; y sería del caso proceder a examinar si es viable o no, librar el respectivo mandamiento de pago dentro del presente trámite, si no se observara que estamos ante la presencia de una acción que debe tramitarse como proceso de menor cuantía; en razón a ello, la demandante debe actuar a través de un profesional del derecho; y como se constata que no es abogada inscrita, conforme se corrobora de la consulta realizada por el despacho en la página del SIRNA, de acuerdo a su número de cédula de ciudadanía; es por lo que, se procederá en la parte resolutive de este auto a abstenernos de tramitar la presente demanda, en razón, itero, a que la demandante debe actuar a través de apoderada judicial, y en razón a la cuantía, ya que la pretensión de la demanda excede el equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del C.G.P. y artículo 28 del Decreto 196 de 1971.

R E S U E L V E:

PRIMERO: Abstenernos de tramitar la presente demanda, en razón a lo antes motivado.

SEGUNDO: Abstenernos de tener como demandante a la señora ANA BEATRIZ PICO DIEZ, en razón a lo motivado.

NOTIFÍQUESE

El Juez,,

JOSÉ ESTANISLAO YÁÑEZ MONCADA

Firmado Por:
Jose Estanislao Maria Yañez Moncada
Juez Municipal
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División 010 De Sistemas De Ingeniería
Cucuta - N. De Santander

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6f4b769e62c72ef10dec92f7ce1a3557e9a3efe8eb66c27ff4928da816ebc38e**

Documento generado en 20/06/2023 05:42:07 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>